

GLOBALIZACION Y POLITICA

David Ibarra
13 de abril de 2009
El Universal

Los largos años de libertades económicas sin cortapisas parecen aproximarse a su fin, pero no por decisión nuestra, sino por la posible configuración de un nuevo orden económico internacional, acaso más amigable, menos impositivo. En muchos países, el periodo en que los dictados del mercado no encontraban respuesta equilibradora de un Estado en franca y deliberada retirada, causaron más fracturas sociales de las que pretendían allanar.

No se cumplieron los ofrecimientos esperanzadores del cambio neoliberal en elevar el bienestar general, la eficiencia productiva o erradicar la corrupción burocrática. Las ventajas atribuidas al “Estado gendarme”, a la renuncia de la política industrial y comercial, a la inversión extranjera, forman un espejismo del que comienza a despertarnos el decaimiento del ritmo secular de desarrollo latinoamericano y, luego, el impacto brutal de la crisis presente.

La globalización con todas sus ventajas, ha traído consigo el ahondamiento de las desigualdades económicas y sociales dentro y entre los países. La pobreza disminuye en los estados y gobiernos desarrollistas -como Corea, Chile, China- sin perjuicio de que se ahondan las disparidades distributivas. En todas las latitudes, incluidos los países industrializados, la concentración del ingreso parece ser atributo congénito de la globalización.

De otra parte, la integración de mercados, manifiesta en la formación de enormes cadenas de producción, comercio y finanzas, ha creado un mundo económico interdependiente, a tal punto, que los ciclos de depresión o prosperidad afectan simultáneamente a todos los países. Hoy en día, hasta la

economía nacional más fuerte, los Estados Unidos, encaran fuerzas económicas que no puede controlar.

El meollo de economía globalizada está constituido por empresas oligopólicas transnacionales que procuran prosperar al margen de las regulaciones e impuestos estatales, fraccionando la producción para aprovechar los recursos naturales, los salarios bajos o las regulaciones laxas de las más diversas localizaciones. Por eso, se ha clausurado la tendencia prevaleciente desde comienzos del siglo pasado al aumento de la participación gubernamental en el producto principalmente para mejorar la protección social de las poblaciones y el capital social básico de las economías. Hoy retroceden los estados benefactores de los países industrializados, mientras se acrecientan los déficit sociales en buena parte del mundo en desarrollo. En íntima relación con lo anterior, más y más gobiernos quedan impedidos de controlar lo que ocurre en su territorio. En el mundo proliferan los estados inadecuados, fallidos o fracasados, incapaces de imponer orden, contener la descomposición social al desatender demandas legítimas de la población.

Además, la globalización del presente se encuentra en un periodo de transición en la distribución geográfica del poder económico. Las ventajas históricas que favorecieron a Estados Unidos, Europa y Japón en términos de desarrollo y de garantías a la seguridad social de sus habitantes, está migrando con cierta rapidez a los países emergentes del Pacífico y del Indico. Los Estados Unidos han dejado de ser la nación con mayor capacidad exportadora de capitales y bienes para constituirse en el principal consumidor que absorbe buena parte del ahorro universal. Del otro lado, China se ubica desde el año 2000 como la cuarta potencia industrial del mundo y la tercera en capacidad exportadora, al paso que acumula más de dos millones de millones de dólares en sus reservas internacionales que presta mayoritariamente a la tesorería norteamericana.

Los desajustes económicos sin precedentes entre las economías globalizadas, el ascenso del poder de los oligopolios transnacionales, la magnitud y de la volatilidad de las transacciones financieras, reclaman normas y soluciones políticas supranacionales. La economía sin fronteras, carece de mecanismos que permitan alcanzar soluciones a los desajustes acumulados y los que pueden sobrevenir en el mundo. Las Naciones Unidas carecen de autoridad suficiente y sus decisiones pueden ser bloqueadas por el veto de las cinco grandes potencias. Poder económico y, sobre todo, poder militar, son los medios preferidos hasta ahora para desarrollar o imponer acciones y orden a escala global.

En esas circunstancias, los tropiezos para arribar a decisiones compartidas son más y más difíciles a paso y medida que se diluyen las supremacías económicas y sólo queda la fuerza de las armas. Los resultados de la pasada reunión del G-20 convocada con el propósito único de resolver la crisis económica internacional, ilustran tanto la presencia de intereses encontrados, como la falta de ordenamientos políticos de formación de consensos.

La propuesta de los Estados Unidos consistía centralmente en unificar un esfuerzo fiscal e incrementar el gasto público de cada uno de los países en 2% del producto, como medio de fortalecer al unísono la demanda mundial y evitar los costos de las filtraciones a favor de las economías que se abstuvieran de colaborar. La Unión Europea con estados benefactores dotados de mecanismos contracíclicos automáticos, prefería establecer regulaciones universales al comportamiento de las instituciones financieras, sobre todo a las norteamericanas cuyos excesos abrieron las puertas a la crisis. Al propio tiempo, Europa y los Estados Unidos encaraban la responsabilidad de auxiliar en sus áreas de influencia a los países ex-socialistas y a los latinoamericanos, lastimados profundamente por el receso económico universal. Pero, de otro lado, no desean ceder terreno en el manejo de los organismos financieros internacionales,

revisando cuotas o incorporando a más países a puestos de decisión. De su lado, las naciones en desarrollo y singularmente las que disponen del grueso de las reservas internacionales, aspiraron a lograr voz y poder en las decisiones de corto plazo y en las relativas a la reforma del orden económico internacional.

Las decisiones del G-20 hicieron a un lado las propuestas trascendentes, sólo abarcaron los puntos donde el margen de acuerdo parecía sólido, pero no acertaron a dar respuestas supranacionales a problemas del mismo género. Acrecentar los recursos y la capacidad supervisora del FMI contó con el interés conjunto de Europa, Norteamérica, países ex-socialistas y latinoamericanos. En cambio, los Estados Unidos no obtuvieron el respaldo, aunque sí promesas, en torno al esfuerzo fiscal conjunto, indispensable a la recuperación mundial. Y los gobiernos europeos no avanzaron en establecer normas regulatorias universales estrictas a las instituciones financieras del mundo, fuera de los ámbitos decisorios nacionales. Las naciones emergentes con economías más poderosas, tampoco se les concedió influencia acrecentada en los organismos decisorios internacionales. A su vez, los países de menor desarrollo relativo se fueron con las manos casi vacías, ni siquiera se convino imprimir nueva vida a la Ronda de Doha, que daría acceso a los productos agropecuarios en los mercados del Primer Mundo.

Algo se avanzó, pero el camino a la reforma política del mundo todavía está lleno de impedimentos. Quizás el mayor logro haya consistido en suprimir a escala nacional los dogmas de la supremacía inequívoca del mercado frente al Estado, del equilibrio presupuestario a ultranza, del rechazo invariable a las políticas keynesianas. Los costos residen en la cortedad de las soluciones, en la prolongación innecesaria de la crisis, en el descuido a la desigualdad social que prevalece en el mundo.

